



Situación y perspectivas de la economía mundial

Resumen ejecutivo

2023

Resumen ejecutivo

Perturbaciones múltiples en la economía mundial

En 2022, una serie de perturbaciones graves y reforzadas mutuamente afectaron la economía mundial cuando ya casi se había recorrido la mitad del camino para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030. Mientras los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) todavía repercutían en todo el mundo, la guerra en Ucrania desató una nueva crisis, causó trastornos en los mercados alimentario y energético y agudizó la inseguridad alimentaria y la malnutrición en muchos países en desarrollo. La inflación en alza acarrió una erosión de los ingresos reales y una crisis del costo de la vida a nivel mundial que ha sumido a millones de personas en la pobreza y la penuria económica. Al mismo tiempo, la crisis climática siguió causando grandes estragos, pues las olas de calor, los incendios forestales, las inundaciones y los huracanes infligieron daños económicos inmensos y generaron crisis humanitarias en numerosos países.

Todas esas perturbaciones afectarán seriamente a la economía mundial en 2023. Una inflación elevada y persistente, que como promedio llegó a alrededor del 9 % en 2022, dio pie a una política agresiva de contracción monetaria en muchos países desarrollados y en desarrollo. Los rápidos aumentos de los tipos de interés, especialmente los dictados por la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, han tenido efectos indirectos a nivel mundial y han disparado la salida de

capitales y la depreciación de las monedas en los países en desarrollo, aumentado el estrés de la balanza de pagos y exacerbado los riesgos de sostenibilidad de la deuda. Las condiciones de financiación se han endurecido notablemente, en medio de altos niveles de deuda privada y pública, lo que encarece los costos del servicio de la deuda, limita el margen de maniobra fiscal y aumenta los riesgos crediticios soberanos. El alza de los tipos de interés y la disminución del poder adquisitivo han mermado la confianza de los consumidores y la percepción de los inversionistas, lo que ensombrece aún más las perspectivas de crecimiento de la economía mundial a corto plazo. El comercio mundial ha disminuido debido a la reducción de la demanda de bienes de consumo, la prolongación de la guerra en Ucrania y los persistentes problemas de la cadena de suministro.

En esta coyuntura, se prevé una desaceleración del crecimiento de la producción mundial, que pasará de un 3 % previsto en 2022 a solo un 1,9 % en 2023, una de las tasas de crecimiento más bajas de las últimas décadas. Las previsiones de crecimiento mundial indican un incremento moderado de hasta el 2,7 % en 2024 si, como se espera, algunos obstáculos macroeconómicos comienzan a despejarse el año próximo. Se prevé que las presiones inflacionarias disminuyan gradualmente al enfriarse la demanda agregada de la economía mundial. Ello permitirá que la Reserva Federal y otros grandes bancos centrales reduzcan el ritmo de contracción monetaria y, finalmente, adopten una política monetaria

más expansiva. No obstante, las perspectivas económicas a corto plazo siguen siendo muy inciertas, pues persisten innumerables riesgos de orden económico, financiero, geopolítico y ambiental.

Desaceleración económica brusca en la mayoría de los países desarrollados

La desaceleración de la actividad económica mundial afecta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, y muchos de ellos corren el riesgo de entrar en recesión en 2023. Se ha aplacado el impulso al crecimiento en los Estados Unidos, la Unión Europea y otras economías desarrolladas, lo que afecta negativamente al resto de la economía mundial. En los Estados Unidos, se prevé que la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) sea de apenas un 0,4 % en 2023, tras alcanzar aproximadamente un 1,8 % en 2022. Se espera que los consumidores recorten sus gastos debido a los tipos de interés más elevados, unos ingresos reales más bajos y reducciones considerables del activo neto de los hogares. El aumento de las tasas de préstamos hipotecarios y el repunte de los costos de construcción probablemente lastrarán el mercado inmobiliario, y se proyecta una mayor caída de la inversión fija en construcción residencial.

Las perspectivas económicas de Europa a corto plazo se han deteriorado bruscamente al continuar la guerra en Ucrania. Se prevé que muchos países europeos experimenten una recesión moderada, caracterizada por unos altos costos de la energía, una inflación elevada y el endurecimiento de las condiciones de financiación, que deprimirá el consumo de los hogares y la inversión. Según las previsiones, el crecimiento en la Unión Europea será de un 0,2 % en 2023, lo que supondrá una disminución respecto del 3,3 % estimado para 2022, año en el que la relajación de las restricciones por la COVID-19 y la liberación de la demanda insatisfecha impulsaron la actividad económica. Mientras la Unión Europea continúa tratando de reducir su dependencia de los combustibles

fósiles de la Federación de Rusia, la región sigue siendo vulnerable a las perturbaciones en el suministro de energía, incluida la escasez de gas. Las perspectivas de la economía del Reino Unido son especialmente sombrías dados el acusado descenso del gasto de los hogares, las presiones fiscales y los problemas de oferta ocasionados en parte por el Brexit. El Reino Unido entró en recesión en el segundo semestre de 2022, y se prevé que su PIB se contraiga en un 0,8 % en 2023.

Se espera que la economía del Japón, cuyo crecimiento ha sido moderado, sea una de las economías desarrolladas que mejores resultados económicos obtengan en 2023. A diferencia de lo que sucede en otras economías desarrolladas, sus políticas monetaria y fiscal siguen siendo expansivas. Sin embargo, la persistente escasez de chips, el incremento de los costos de importación (impulsado por la depreciación del yen japonés) y la disminución de la demanda externa vienen afectando la producción industrial. Se proyecta un crecimiento del PIB del 1,5 % en 2023, cifra ligeramente inferior que el crecimiento previsto del 1,6 % para 2022.

La guerra en Ucrania repercute gravemente en las perspectivas económicas a corto plazo de la Comunidad de Estados Independientes y Georgia. La contracción de la economía de la Federación de Rusia y las considerables pérdidas de producción en Ucrania están teniendo efectos indirectos en el resto de la región. No obstante, en 2022 la economía rusa se contrajo menos de lo previsto inicialmente, pues el PIB disminuyó en solo un 3,5 % debido al enorme excedente por cuenta corriente, la estabilidad sostenida del sector bancario y la decisión de modificar la política monetaria restrictiva impuesta inicialmente. Varias de las economías de la región se han beneficiado de la reubicación de empresas y residentes, así como de las entradas de capital, y su crecimiento en 2022 ha sido superior al previsto. La mejora de la relación de intercambio contribuyó al crecimiento de los países exportadores de energía de la región. En general, se espera que el PIB agregado de la Comunidad de Estados Independientes y Georgia (excluida Ucrania, país sobre el cual no se ofrecen pronósticos en el presente informe

debido a lo incierto de su situación) sufra una contracción del 1 % en 2023, tras una disminución del 1,6 % estimada para 2022.

Deterioro de las perspectivas en la mayoría de las regiones en desarrollo

Se prevé que el crecimiento de China aumente de forma moderada en 2023, y que sus resultados económicos en 2022 sean inferiores a los previstos. En medio de los confinamientos recurrentes debido a la COVID-19 y el estrés prolongado a que se ha visto sometido el mercado inmobiliario, la economía creció en solo un 3 % en 2022. Dado que el Gobierno abandonó su política de COVID-19 cero a finales de 2022 y ha flexibilizado las políticas monetaria y fiscal, se prevé que el crecimiento se acelere hasta un 4,8 % en 2023. Sin embargo, cabe esperar que la reapertura económica sea problemática. Es probable que el crecimiento se mantenga muy por debajo de las cotas prepandémicas, que eran de entre un 6 % y un 6,5 %.

La recuperación económica de Asia Oriental sigue siendo frágil, aunque el crecimiento medio es más vigoroso que en otras regiones. Se prevé que en 2023 el crecimiento del PIB en Asia Oriental alcance un 4,4 %, en comparación con el 3,2 % de 2022, lo que obedece principalmente a la modesta recuperación del crecimiento de China. Sin embargo, muchas economías de la región (aparte de la de China) están perdiendo impulso a medida que se atenúa la demanda insatisfecha, sube el costo de la vida y disminuye la demanda de exportación hacia los Estados Unidos y Europa. Esta situación coincide con el endurecimiento de las condiciones de financiación en el plano mundial y la adopción por los países de políticas monetarias y fiscales contractivas para frenar las presiones inflacionarias. Aunque la recuperación prevista de China sustentará el crecimiento en el resto de la región, todo repunte de las infecciones de COVID-19 puede causar retrocesos temporales.

En Asia Meridional, las perspectivas económicas se deterioraron notablemente debido a los

elevados precios de los alimentos y la energía, el endurecimiento de las políticas monetarias y las vulnerabilidades fiscales. Se prevé que el crecimiento medio del PIB mermará, del 5,6 % en 2022 al 4,8 % en 2023. En la India, se espera que el crecimiento siga siendo vigoroso y alcance el 5,8 %, una tasa ligeramente inferior a la tasa estimada del 6,4 % en 2022, pues el alza de los tipos de interés y la desaceleración económica mundial influirán en la inversión y las exportaciones. En otras economías de la región, las perspectivas son más complicadas. En 2022, Bangladesh, el Pakistán y Sri Lanka pidieron asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI).

En Asia Occidental, los países productores de petróleo se han recuperado de la crisis económica y ya se benefician del alza de los precios y la producción de petróleo, así como de la recuperación del sector turístico. En los países que no producen petróleo, en cambio, la recuperación sigue siendo lenta debido a un menor acceso a financiación internacional y las duras restricciones fiscales. Se prevé que el crecimiento medio se frene y pase de aproximadamente un 6,4 % en 2022 a un 3,5 % en 2023, teniendo en cuenta el empeoramiento de las condiciones externas.

En África, las proyecciones de crecimiento económico siguen siendo moderadas, y el entorno mundial inestable e incierto complica los desafíos internos. La región se ha visto afectada por perturbaciones múltiples, como la disminución de la demanda de sus principales socios comerciales (especialmente China y Europa), un aumento acusado de los precios de la energía y los alimentos, el alza rápida de los costos de endeudamiento y los fenómenos meteorológicos adversos. A medida que aumenta la carga del servicio de la deuda, un número cada vez mayor de Gobiernos buscan apoyo bilateral y multilateral. Se prevé que el crecimiento económico disminuya, de un 4,1 % estimado en 2022 a un 3,8 % en 2023.

Las perspectivas de América Latina y el Caribe siguen siendo complicadas dadas las condiciones externas desfavorables, un margen normativo

macroeconómico limitado y una inflación elevada y persistente. Según las proyecciones, el crecimiento regional se frenará y, tras un incremento estimado en 3,8 % para 2022, apenas alcanzará un 1,4 % en 2023. Los mercados de trabajo enfrentarán una situación difícil. Es poco probable que se produzcan reducciones de la pobreza a corto plazo en toda la región. Se prevé que las economías más grandes de la región —Argentina, Brasil y México— crezcan a un ritmo muy lento debido al endurecimiento de las condiciones de financiación, la reducción de las exportaciones y las vulnerabilidades internas.

Los países menos adelantados, muchos de los cuales son muy vulnerables a las perturbaciones externas, enfrentarán grandes dificultades en 2023. Según las proyecciones, su crecimiento será del 4,4 % en 2023, tasa similar a la del año pasado y notablemente inferior a la meta del 7 % fijada en el ODS 8. En muchos de esos países se corre el riesgo de sufrir una década perdida como consecuencia de una capacidad productiva limitada, un margen fiscal insuficiente, grandes desequilibrios macroeconómicos y una creciente vulnerabilidad de la deuda. Para los pequeños Estados insulares en desarrollo, las perspectivas a corto plazo siguen siendo desalentadoras. No se ha recuperado el número de llegadas de turistas, y muchos de esos países se ven afectados desproporcionadamente por riesgos climáticos cada vez mayores y por los desastres naturales.

Los bancos centrales luchan tenazmente contra la inflación

Tras un largo período de estabilidad de los precios, la inflación ha vuelto a aumentar en muchos países, donde afecta de manera desproporcionada a los hogares de ingresos bajos. Persisten las presiones inflacionarias provocadas por la pandemia, pues la demanda se ha ido recuperando rápidamente mientras la oferta va a la zaga en medio de trastornos constantes en las cadenas de suministro. El alza desorbitada de los precios de los alimentos y la energía y las nuevas afectaciones al suministro causadas por la guerra en Ucrania dispararon la inflación e hicieron revisar al alza las

proyecciones de la inflación a corto y mediano plazo. La inflación mundial media alcanzó en 2022 el nivel más alto registrado en dos decenios. Es probable que la presión alcista sobre los precios disminuya con las medidas agresivas de endurecimiento monetario y la reducción de la demanda, pero se prevé que la inflación mundial siga siendo elevada en 2023.

En 2022, los bancos centrales de todo el mundo decretaron aumentos rápidos y sucesivos de los tipos de interés para controlar la inflación y contener las expectativas de inflación. Esta tendencia a una política monetaria más dura fue excepcionalmente generalizada. Más del 85 % de las autoridades monetarias del mundo subieron los tipos el año pasado. La Reserva Federal lideró el endurecimiento de la política monetaria a nivel mundial y subió su tipo de interés de referencia en seis ocasiones, desde el 0 % hasta el 0,25 % en marzo y del 4,25 % al 4,5 % en diciembre de 2022. Este fue el mayor incremento acumulativo de los tipos de interés registrado en solo un año desde 1980. Como es probable que se haya llegado al nivel máximo de inflación a finales de 2022, se espera que en 2023 los bancos centrales, especialmente los de los países desarrollados, disminuyan el ritmo de aumento de los tipos de interés, en particular si la inflación se acerca a las respectivas metas de inflación nacionales.

Endeudamiento creciente y vulnerabilidades de la balanza de pagos

Las subidas bruscas y rápidas de los tipos de interés, el aumento de las tensiones geopolíticas y el deterioro de las perspectivas económicas mundiales han provocado en muchos países una reacción de huida hacia valores más seguros, caracterizada por flujos salientes de inversión extranjera de cartera y la depreciación de las monedas nacionales frente al dólar. La debilidad de las monedas nacionales abultó las facturas de importación e intensificó las presiones inflacionarias en muchos países en desarrollo. La imposición de condiciones de financiación más estrictas en los mercados de capitales internacionales aumentó los costos de

financiación y los riesgos de refinanciación, lo que ha afectado las perspectivas de inversión y crecimiento.

El rápido endurecimiento de las condiciones de financiación a nivel mundial ha agudizado las vulnerabilidades de la balanza de pagos y de la deuda en muchos países en desarrollo. En varios países importadores de productos básicos se ha producido un incremento notable de las necesidades brutas de financiación externa en los últimos años. Ante el alza de los costos de la deuda soberana, también cuesta más pagar el servicio de la deuda externa, que absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos fiscales. Al aumentar la carga que supone el servicio de la deuda, se limitan los gastos tan necesarios para apoyar la recuperación económica, proteger a los grupos de población más vulnerables durante la crisis del costo de la vida y financiar el desarrollo sostenible.

En África, el pago del servicio de la deuda externa pública y con garantía pública ascendió como promedio a un 10 % de los ingresos públicos en 2021, frente a un 3 % en 2011. Por otra parte, las condiciones de financiación más estrictas hacen que para muchos países en desarrollo sea más difícil refinanciar y reestructurar su deuda, por lo que corren un mayor riesgo de impago. Un número cada vez mayor de países en desarrollo, incluidos varios donde muchas personas viven en la pobreza, se encuentran en situación de endeudamiento precario.

Otro revés para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2022, el empleo siguió recuperándose de la pandemia, pero se aprecian diferencias importantes entre países. En muchas economías desarrolladas, los mercados de trabajo se volvieron excepcionalmente tensos, como demuestran las cifras de desempleo en mínimos históricos y los máximos históricos de empleo y puestos vacantes. Los sectores como la construcción, la información y comunicación, la alimentación y el alojamiento siguieron

acusando una grave escasez de mano de obra. En la mayoría de los países en desarrollo, en cambio, la recuperación del empleo ha sido más lenta y abunda la capacidad ociosa. La tasa media de desempleo de los países en desarrollo en 2022 siguió siendo considerablemente más alta que antes de la pandemia. Todavía no se ha recuperado del todo la pérdida de empleo que afectó de forma desproporcionada a las mujeres en 2020; las mejoras recientes se deben sobre todo a la recuperación del empleo informal. Ante el deterioro del panorama mundial, las perspectivas laborales para 2023 y 2024 se han debilitado en la inmensa mayoría de los países.

Un crecimiento más lento, una inflación elevada y la creciente vulnerabilidad de la deuda amenazan con hacer retroceder aún más los logros en materia de ODS que tanto ha costado alcanzar, agravando los efectos ya negativos de la pandemia de COVID-19. Si se produjera un período prolongado de debilidad económica y lento crecimiento de los ingresos, los esfuerzos por erradicar la pobreza se verían mermados al limitar las capacidades nacionales para invertir en sanidad, educación, infraestructuras físicas y digitales y transición energética.

La crisis mundial de los alimentos y la energía provocada por la guerra de Ucrania está golpeando con dureza a muchos países en desarrollo. Además, las cosechas han sufrido las consecuencias de las graves sequías e inundaciones, especialmente en partes de África y Asia Meridional, situación que ha llevado a la pobreza a millones de personas. A causa de la subida de los precios de los alimentos y los fertilizantes y de las interrupciones del suministro, el número de personas que se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria se ha duplicado con creces entre 2019 y 2022.

La Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por el Mar Negro, auspiciada por las Naciones Unidas y Türkiye, ha aliviado en cierta medida la situación, al conseguir que se reanudara las exportaciones de alimentos desde Ucrania al resto del mundo; entre agosto y mediados de diciembre de 2022 se transportaron más de 15 millones de toneladas métricas de

grano y otros alimentos. Además, mediante el memorando de entendimiento que firmaron en julio de 2022, la Federación de Rusia y la Secretaría de las Naciones Unidas acordaron facilitar el acceso sin trabas a los mercados mundiales de alimentos y fertilizantes, incluidos los materiales necesarios para producir fertilizantes, procedentes de la Federación de Rusia. No obstante, la incertidumbre en torno a la duración y la intensidad del conflicto, junto con las posibles restricciones a la exportación en los países exportadores de alimentos, hacen prever que los problemas de oferta de alimentos persistirán en 2023.

Nuevos retos para la política macroeconómica

Quienes formulan políticas afrontan difíciles disyuntivas al dirigir sus economías durante las crisis actuales y apostar por una recuperación inclusiva y sostenible. Hay que calibrar con cuidado las políticas macroeconómicas buscando el equilibrio entre los objetivos de estimular la producción y contener la inflación, coordinando de forma eficaz las políticas monetaria y fiscal para reducir al mínimo la probabilidad de una recesión económica prolongada y grave. El riesgo de cometer errores al formular políticas es elevado, sobre todo habida cuenta de la capacidad limitada que han tenido las políticas macroeconómicas para responder a las perturbaciones de carácter no económico. Los errores en materia de políticas podrían agravar la desaceleración de la economía y causar más daños socioeconómicos, especialmente a los grupos vulnerables.

El riesgo de adoptar una política monetaria demasiado restrictiva

La política monetaria plantea grandes retos y disyuntivas. Los bancos centrales de muchos países desarrollados, entre ellos la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, se mostraron reticentes a subir los tipos de interés en un principio, al considerar que el alza de la inflación

sería transitoria. Cuando quedó patente que las presiones inflacionarias iban a persistir y podrían llegar a desanclar las expectativas de inflación, los bancos emprendieron una senda de endurecimiento agresivo de la política monetaria y subieron los tipos a un ritmo muy rápido en 2022. Ahora los bancos centrales se encuentran en una auténtica encrucijada, puesto que las perspectivas económicas se han deteriorado sin que la inflación esté totalmente controlada y sigue habiendo dificultades presupuestarias. Las medidas de endurecimiento monetario rápido y sincronizado de los principales bancos centrales del mundo han retirado de los mercados demasiada liquidez demasiado rápido, situación que ha generado importantes efectos indirectos negativos en la economía mundial y ha debilitado las perspectivas económicas de los países vulnerables.

Si se endurece excesivamente la política monetaria, la economía mundial entraría en una desaceleración innecesariamente dura, resultado que podría evitarse si cada banco central subiera los tipos teniendo en cuenta con precisión los efectos recíprocos que tendrían unas subidas de tipos similares por parte de otros bancos centrales. Para eso hará falta que los principales bancos centrales se coordinen de forma más eficaz y comuniquen con claridad las políticas para gestionar y moderar las expectativas inflacionarias.

Replantearse los objetivos de inflación

Dados los retos que entraña mantener la estabilidad de precios a la vez que se favorece el crecimiento, los bancos centrales necesitan la máxima flexibilidad para anclar las expectativas de inflación a largo plazo. La actual crisis de inflación, una vez apaciguada, brindará la oportunidad de que revisen los marcos monetarios y reconsideren unos objetivos de inflación excesivamente rígidos. Existen varias opciones con las que los bancos centrales podrían tener más flexibilidad en materia de políticas y a la vez preservar la credibilidad de la política monetaria. Elevar los objetivos de

inflación de los países desarrollados del 2 % al 3 % o 4 % puede dejar más margen para estimular el empleo y el crecimiento en tiempos difíciles. Otras posibilidades son fijarse como objetivo una horquilla, por ejemplo, entre el 2 % y el 3,5 %, o centrarse en el nivel de precios en lugar de la tasa de inflación anual.

Aunque reformar los marcos existentes podría traer ventajas considerables, los bancos centrales también tendrán que aplicar un proceso deliberado y exhaustivo para no perder credibilidad y para que no se desanclen las expectativas de inflación. Reevaluar y recalibrar los instrumentos de política monetaria a partir de la experiencia acumulada desde la crisis financiera mundial puede contribuir a respaldar mejor la estabilidad de precios y la credibilidad de las políticas, promoviendo al mismo tiempo el pleno empleo y el crecimiento económico.

Hay que evitar la austeridad fiscal

Los persistentes déficits fiscales y los elevados niveles de deuda pública han suscitado llamamientos en favor de una rápida consolidación fiscal, aunque la recuperación tras la recesión provocada por la COVID-19 siga siendo incompleta y frágil. Sin embargo, ahora no es el momento de una austeridad fiscal que será dolorosa en el plano social y podría resultar contraproducente. Por un lado, la reducción de los presupuestos públicos suele ir asociada a dolorosos recortes del gasto social que perjudican de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como las mujeres y los niños. Los recortes de los presupuestos públicos suelen reducir o eliminar programas y servicios sociales que benefician más a las mujeres que a los hombres, lo que para ellas supone pérdidas de ingresos, un acceso más restringido a la atención de la salud y la educación, y un aumento del trabajo no remunerado y de la pobreza de tiempo. Esas repercusiones no hacen sino agravar la ya difícil situación de quienes todavía no han vuelto a trabajar ni han recuperado sus medios de vida porque la recuperación económica fue peor de lo previsto.

Al mismo tiempo, poner rumbo a la austeridad demasiado temprano o con más firmeza de la necesaria también impediría el crecimiento, retrasaría la recuperación de las crisis actuales y socavaría la financiación que tanta falta hace para lograr el desarrollo sostenible y luchar contra el cambio climático.

En un entorno macroeconómico y financiero cada vez más difícil, muchos países en desarrollo corren el riesgo de entrar en un círculo vicioso de escasa inversión, crecimiento lento y una carga cada vez más pesada del servicio de la deuda. Cualquier política de reducción del déficit rápida, ya sea recortando el gasto o subiendo los impuestos sustancialmente, conduciría seguramente a las economías a la recesión o a un período prolongado de crecimiento lento. En cualquier caso, contribuirá a empeorar en lugar de mejorar la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo.

Cuando se maneja bien, el gasto fiscal resulta especialmente eficaz para respaldar el crecimiento y el desarrollo en épocas de atonía económica, gracias a los grandes efectos multiplicadores del gasto público. En la mayoría de los países en desarrollo, la producción real sigue siendo inferior a la producción potencial, lo que implica que persiste la atonía económica. En esa situación, la inversión pública no desplaza a la privada, sino que puede ser un potente instrumento para generar empleo y reactivar el crecimiento. La inversión pública impulsa la demanda agregada a corto plazo, pero también estimula la formación de capital, ampliando las capacidades productivas y elevando el crecimiento potencial. Especialmente en un momento de gran incertidumbre, la inversión pública estratégica señala el compromiso de las políticas y probablemente atraerá la inversión privada, que seguirá siendo fundamental para mitigar las secuelas de la pandemia. Al ampliar las capacidades productivas, la inversión pública también puede atenuar las restricciones de la oferta y reducir las presiones inflacionarias a medio plazo. Dado que en la mayoría de los países el margen de maniobra fiscal es limitado, el gasto público debe ser selectivo y hay que gestionarlo de forma correcta y eficiente.

Las dificultades actuales requieren un conjunto transformador de medidas de estímulo en favor de los ODS como propuso hace poco el Secretario General de las Naciones Unidas. Esto ayudaría a compensar el deterioro de las condiciones de financiación y permitiría a los países en desarrollo aumentar la inversión en desarrollo sostenible. Las medidas abarcan tanto las necesidades urgentes a corto plazo como los recursos necesarios para financiar el desarrollo sostenible a largo plazo, y exigen aumentar de forma masiva dicha financiación, incluso para ayuda humanitaria y acción para el clima, a través de préstamos en condiciones favorables y de otra índole.

Una política fiscal que estimule el crecimiento y el progreso en los ODS

Los países en desarrollo tienen varias opciones para proteger y ampliar el margen de maniobra fiscal y aprovechar al máximo los efectos positivos del gasto público en el crecimiento y el desarrollo sostenible. Los Gobiernos tendrán que reasignar y volver a priorizar el gasto público en favor de los grupos vulnerables mediante intervenciones de políticas directas. Para ello tendrán que reforzar los sistemas de protección social y procurar un apoyo continuado a través de subvenciones específicas y temporales, transferencias en efectivo y descuentos en las facturas de servicios públicos, que podrán complementarse con reducciones de los impuestos al consumo o de los derechos de aduana.

Los Gobiernos pueden orientar, apoyar y atraer la inversión privada en sectores críticos, como la educación, la sanidad, las infraestructuras digitales, las nuevas tecnologías y la adaptación al cambio climático y su mitigación. La inversión pública estratégica en estos sectores puede generar cuantiosos réditos sociales, acelerar el crecimiento de la productividad y reforzar la resiliencia a las crisis económicas, sociales y ambientales.

Además, los Gobiernos tendrán que redoblar esfuerzos para ampliar su base de ingresos y así mejorar la recaudación y reforzar la sostenibilidad presupuestaria. En el corto plazo, la digitalización y las nuevas tecnologías, por ejemplo, pueden servir para reducir la elusión y la evasión fiscales y mejorar los ingresos fiscales. A medio plazo, los Gobiernos tendrán que poner en marcha reformas tributarias y ampliar las bases imponibles mediante impuestos progresivos sobre la renta y el patrimonio.

Es imprescindible reforzar la cooperación internacional

La pandemia, las crisis alimentaria y energética mundiales, los riesgos climáticos y la inminente crisis de la deuda en muchos países en desarrollo están poniendo a prueba los límites de los marcos multilaterales existentes. La cooperación internacional nunca ha sido tan importante como ahora para hacer frente a las múltiples crisis mundiales y volver a encarrilar al mundo hacia la consecución de los ODS.

Desde que empezó la pandemia, la comunidad internacional ha ofrecido apoyo financiero y ha redoblado la concesión de préstamos de emergencia del FMI a los países en desarrollo, más recientemente, por ejemplo, a través de una nueva ventanilla para shocks alimentarios. En agosto de 2021 se aprobó la mayor asignación de derechos especiales de giro de la historia del FMI: 650.000 millones de dólares para proporcionar liquidez al sistema financiero mundial. No obstante, solo se destinó una pequeña parte —21.000 millones de dólares— a países de ingreso bajo. Algunos países han reasignado parte de sus derechos especiales de giro en favor de África, siguiendo el ejemplo de China, que destinó al continente 10.000 millones de dólares de los 40.000 millones que le habían asignado. Aunque los derechos especiales de giro siguen siendo una importante fuente de liquidez para los países cuya balanza de pagos plantea problemas, su tipo de interés aumentó considerablemente en 2022. La comunidad internacional tendrá que limitar los tipos de

interés y las comisiones para que los países más pobres y vulnerables puedan acceder al mecanismo a fin de cubrir sus necesidades de financiación a corto plazo.

También hará falta más apoyo de la comunidad internacional para resolver el sobreendeudamiento, en los casos en que las perturbaciones exógenas limitan la capacidad de los países para atender sus obligaciones de deuda. El Marco Común para el Tratamiento de la Deuda del Grupo de los 20 sigue siendo el principal mecanismo internacional de alivio de la deuda a disposición de los países menos adelantados y otros países de ingreso bajo que están sobreendeudados. No obstante, el Marco no ha estado a la altura de las expectativas: solo tres países se han acogido a las medidas de alivio y ninguno ha terminado la reestructuración desde que el Marco entró en vigor hace más de año y medio. Existe un amplio consenso de que el Marco no funciona, especialmente a la hora de proporcionar soluciones pragmáticas, rápidas, integrales y con visión de futuro para todos los países sobreendeudados. Esas soluciones deben abarcar la suspensión de los pagos del servicio de la deuda, el compromiso de los acreedores oficiales con el deudor y con los acreedores privados, y un proceso de reestructuración

claramente definido. Más allá de estas medidas inmediatas, es necesario establecer un mecanismo estatutario internacional para la reestructuración de la deuda soberana. También hay margen para mejorar los contratos de préstamo, por ejemplo, mediante instrumentos de deuda dependiente del estado o cláusulas de acción colectiva reforzadas.

Al acercarse al ecuador del plazo fijado para los ODS, el mundo se encuentra en una encrucijada. Varias entidades han calculado las necesidades de financiación de los países en desarrollo para alcanzar los objetivos y afrontar la crisis climática, la mayoría de los cálculos las sitúa en torno a varios billones de dólares anuales. Dado el ya limitado margen fiscal de los países en desarrollo y la necesidad cada vez mayor de estimular la recuperación y proteger a los más vulnerables, a esos países les va a costar mucho realizar tales inversiones. Por otro lado, los resultados favorables para el clima y los ODS, conseguidos inicialmente a través de acciones en países concretos, pueden tener importantes efectos indirectos positivos en todo el mundo. Reforzar la cooperación internacional a la hora de movilizar los recursos necesarios para conseguir tales resultados redundará en interés de todos los países, desarrollados y en desarrollo.

Para más información
www.un.org/en/desa



**Naciones
Unidas**

Departamento de
Asuntos Económicos
y Sociales